



Proceso	Ejecutivo
Demandante	JH SERVICE LTDA
Demandado	COOPSALUD EPS S.A.
Radicado	No. 05001-31-03-008-2019-00510-01
Procedencia	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín
Instancia	Segunda
Ponente	Luís Enrique Gil Marín
Asunto	Sentencia No. 007
Decisión	Revoca
Tema	Título ejecutivo
Subtemas	Sentencia anticipada. Decreto y práctica de pruebas. Jurisprudencia.

**TRIBUNAL SUPERIOR**

**SALA SEGUNDA DE DECISION CIVIL**

Medellín (Ant.), seis de marzo de dos mil veintitrés

**I. OBJETO**

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia anticipada proferida por el **JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN (ANT.)**, en el proceso

ejecutivo instaurado por **JH SERVICE LTDA.,** contra **COOSALUD EPS S.A.**

**II. ANTECEDENTES**

**Pretensiones:** El demandante solicita se libre mandamiento de pago a su favor y a cargo de la demandada, por los valores relacionados en los hechos de la demanda como capital que asciende a \$214.080.405,00; más los intereses moratorios a la tasa del 2.4% mensual o la máxima legal permitida por un período de 28 meses que ascienden a \$143.862.032,00; más los intereses que se causen con posterioridad hasta el pago total de la obligación. Por último, solicita la condena en costas para la demandada.

**Elementos fácticos:** La sociedad demandada contrató con la ejecutante la prestación del servicio de transporte asistencial del hospital de Zaragoza, desde el 01 de enero de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017; convención que se celebró en la ciudad de Medellín porque se trataba de servicios para prestar en el Departamento de Antioquia, los cuales fueron facturados así:

Fecha	Factura	Valor
29/02/2016	1351	\$8.848.365,00
31/03/2016	1352	\$17.465.850,00
30/04/2016	1353	\$16.888.650,00
31/05/2016	1354	\$17.239.410,00
30/06/2016	1355	\$17.246.070,00
31/07/2016	1356	\$17.074.020,00
31/08/2016	1357	\$16.223.760,00
30/09/2016	1358	\$17.132.850,00
21/10/2016	1359	\$17.166.150,00

30/11/2016	1360	\$17.199.450,00
31/12/2016	1361	\$17.166.150,00
31/01/2017	1362	\$17.240.520,00
15/03/2017	1373	\$17.189.460,00
Total		\$214.080.405,00

Los títulos fueron aceptados por la ejecutada el 20 de enero de 2017 y han causado intereses moratorios desde el 20 de marzo de 2017; es decir, 60 días después de su aceptación, a la tasa del 2.4% mensual, para un total de \$143.862.032,00; el plazo que se acordó se encuentra vencido y a raíz de algunos acuerdos de pago, la ejecutada ha realizado los siguientes abonos que se han imputado a los intereses de mora: Marzo de 2019 \$30.000.000,00; abril de 2019 \$20.000.000,00 y mayo de 2019 \$30.000.000,00.

***Mandamiento de pago:*** Se libró el 23 de octubre de 2019; una vez notificada la ejecutada del auto de apremio, dio respuesta a la demanda y como medios de defensa propuso los siguientes: ***(i) pago total de la obligación; (ii) mala fe; (iii) cobro de lo no debido y, (iv) inembargabilidad de los recursos del sistema de seguridad social integral.***

***Sentencia:*** El 16 de abril de 2021, se profirió sentencia anticipada con la siguiente resolución:

***"PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones denominadas "PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN", "MALA FE", "COBRO DE LO NO DEBIDO" e "INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL"***

*propuestas por la parte demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.*

**"SEGUNDO: ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN** en favor de JH SERVICE LTDA en contra de COOSALUD EPS S.A. así:

- *Factura N° 1351 por la suma de \$8.848.365*
- *Factura N° 1352 por la suma de \$17.465.850*
- *Factura N° 1353 por la suma de \$16.888.650*
- *Factura N° 1354 por la suma de \$17.239.410*
- *Factura N° 1355 por la suma de \$17.246.070*
- *Factura N° 1356 por la suma de \$17.040.020*
- *Factura N° 1357 por la suma de \$16.223.760*
- *Factura N° 1358 por la suma de \$17.132.850*
- *Factura N° 1359 por la suma de \$17.166.150*
- *Factura N° 1360 por la suma de \$17.199.450*
- *Factura N° 1361 por la suma de \$17.166.150*
- *Factura N° 1373 por la suma de \$17.189.460*

*Más los intereses moratorios sobre cada una de estas sumas desde el 20 de marzo de 2017 a la tasa máxima establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia hasta su pago total.*

**"TERCERO: TENER COMO ABONOS** al momento de realizar la liquidación del crédito los siguientes: \$29.400.000 realizado el 25 de febrero de 2019 (fl. 179 vuelto), \$19.600.000 realizado el 28 de marzo de 2019 (fl. 180) y \$29.400.000 realizado el 31 de mayo de 2019 (fl. 182).

**"CUARTO:** Ordenar el remate y avalúo de los bienes embargados y los que se llegaren a embargar, para que con su producto se cancele en su totalidad el monto de las obligaciones aquí determinadas.

**"QUINTO:** Ordenar la liquidación del crédito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 446 del C.G. del Proceso. En esta deberán imputarse como abonos los contenidos en el numeral tercero de la presente providencia.

**"SEXTO:** Se condena en costas a la parte demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS **(\$5.905.205,55)**".

Luego de referir a los títulos ejecutivos y los requisitos de las facturas cambiarias previstos en la codificación mercantil, señala que los cartulares base del recaudo prestan mérito ejecutivo por cumplir los requisitos legales. En torno a las excepciones de pago total de la obligación y mala fe, fundadas en que para el momento que se libró la orden de apremio, las facturas estaban canceladas, precisa, que para acreditar dichos medios de defensa la ejecutada aporta unos documentos que denomina "*compensación de pagos*", que refieren a las facturas base de la ejecución y al importe compensado; pero los mismos fueron elaborados por la sociedad demandada, sin que ninguno de ellos cuente con la firma de la demandante; amén, que la información

allí vertida carece de respaldo probatorio y, como es conocido, la parte no puede crear su propia prueba; junto a dichos documentos se aportan unas constancias emitidas por el BANCO GNB SUDAMERIS, que dan cuenta de los abonos efectuados en el año 2019 por la accionada a Transportes Vitales S.A. así: el 25 de febrero \$29.400.000,00, el 28 de marzo \$19.600.000,00 y el 31 de mayo \$29.400.000,00; de los que igualmente da cuenta el hecho sexto de la demanda, por lo que se tendrán como tales al momento de liquidar el crédito, sin que se pueda concluir que con ellos se extinguió el total de la obligación; de otra parte, no se acreditó que el extremo activo actuara de mala fe, toda vez que procedió conforme la prerrogativa que le confiere por ser tenedora legítima de los títulos valores; considera que las reseñadas excepciones no están llamadas a prosperar.

En relación a la excepción de cobro de lo no debido, que se fundamenta en el hecho de que las partes al suscribir el acta de liquidación de prestación de servicios en salud No. SAN2016R1V155 el 04 de mayo de 2018, donde se acordó que el valor de la deuda es \$214.080.705,00; novaron la obligación, es decir, extinguieron la obligación anterior y como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, también se extinguieron los intereses; considera que en caso de que se pretenda el cobro de intereses, solo puede ser desde el 04 de noviembre de 2018 hasta el 31 de octubre de 2019, que se pagó la suma de \$134.063.073,00; luego de referir a las normas que regentan la novación así como a lo definido por la jurisprudencia; advierte, que la novación que

se alega es la denominada objetiva o real; que si bien se aportó el acta suscrita por las partes donde se indica que entre ellas se ejecutó un contrato entre el 16 de febrero de 2016 y el 28 de febrero de 2017, donde la sociedad demandante prestó los servicios de salud a personas afiliadas a la entidad demandada, y realiza una liquidación por un total de \$214.080.705,00; para que se declare la existencia de la supuesta novación, es necesario que acreedor y deudor de mutuo acuerdo, decidan cambiar el objeto de la prestación a la que se habían obligado, reemplazando una obligación por otra, y ello no se puede colegir del reseñado documento; estima que resulta evidente, que no fue la intención de las partes novar la obligación primigenia, pues nada se dijo al respecto. Lo que si advierte, es que en dicho escrito las partes reconocen que existe una obligación, así como el monto a la que asciende; verificando que corresponde al valor del capital de las facturas objeto de recaudo; de donde concluye que dicho medio de defensa tampoco está llamado a prosperar.

Por último y, en relación al medio exceptivo nominado inembargabilidad de los recursos del sistema de seguridad social porque la solicitud de medidas previas desconoce la normativa que rige la inembargabilidad de dichos recursos, indica que resulta improcedente para desvirtuar las pretensiones de la demanda porque el hecho alegado en nada controvierte las condiciones formales y sustanciales de los títulos, ni los desvirtúa por ser cuestiones atinentes exclusivamente a lo relacionado con las cautelas solicitadas.

Por todo lo anterior, señala el Juzgado que como el extremo pasivo no cumplió con la carga de la prueba que le incumbía al tenor de lo previsto en el art. 167 del C.G.P., las excepciones propuestas no están llamadas a prosperar y, consecuentemente, ordenará seguir adelante la ejecución conforme lo ordenado en el mandamiento de pago.

**Apelación:** Lo interpuso el extremo pasivo y como motivos de inconformidad señala: Difiere de la decisión porque si bien las facturas aportadas cumplen con los requisitos legales para ser un título valor, hay facturas que no prestan mérito ejecutivo porque fueron canceladas antes de la presentación de la demanda; máxime que la parte actora en el hecho sexto de la demanda reconoció los pagos que recibió de la accionada e imputados a las facturas Nos. 1351 pagada en marzo de 2019; 1352 cancelada en los meses de marzo y mayo de 2019; 1357 pagada en mayo de 2019 y 1373 saldada en febrero de 2019 y, la demanda se radicó el 11 de octubre de 2019 y como los pagos fueron anteriores, el Juzgado debió tener en cuenta los documentos aportados denominados "*Compensación de pagos*", que dan cuenta de los pagos efectuados y, consecuentemente, acoger las excepciones de pago parcial de la obligación y cobro de lo no debido y, ordenar cesar la ejecución por las sumas canceladas y los intereses moratorios sobre las mismas; además, la demandante no informó al Juzgado sobre el pago efectuado el 31 de octubre de 2019, con el cual quedaba saldada la deuda por el capital facturado; información que aportó la demandada a pesar

de ser un deber de la ejecutante conforme con los principios de buena fe y lealtad procesal.

Sumado a lo anterior, la novación propuesta como excepción de mérito, conforme al Código Civil está llamada a prosperar porque con el acta de liquidación de contrato suscrita el 04 de mayo de 2018, se extinguió la obligación primigenia contenida en las facturas objeto de recaudo, pues allí se pactan nuevos plazos y valores por cancelar como lo entendió la pretensora y aceptó al firmar el documento; además, en el escrito el 25 de octubre de 2019, la demandada cedió a la ejecutante las acreencias que tenía con la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia; entidad que quedó como deudora en su lugar y quien realizaría los pagos el 31 de octubre de 2019, como se evidencia en el reseñado documento y en la copia de la transferencia electrónica allegada, cancelando el importe de las facturas Nos. 1353, 1354, 1355, 1356, 1358, 1359, 1360, 1361 y 1362; considera que la demandada sí cumplió con la carga de la prueba, toda vez, que las excepciones propuestas están debidamente acreditadas.

En cuanto a la excepción de inembargabilidad de los recursos del sistema de seguridad social integral, advierte que la solicitud de embargo desconoció lo previsto en las normas que regentan la materia y que dan cuenta de la inembargabilidad; solicita al Despacho abstenerse de ordenar cualquier medida de embargo y, en caso, de que haya sido decretado disponer su levantamiento y oficiar a las entidades bancarias. Por estas razones, solicita revocar

la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acoger las excepciones propuestas.

Dentro del término del traslado en segunda instancia para sustentar el recurso de apelación, en síntesis, volvió sobre los argumentos que vienen de extractarse.

Por su parte, el extremo activo indica que la sentencia de primer grado no hizo otra cosa que dar aplicación al art. 1653 del C. de Comercio; reconociendo que los pagos hechos por la demandada son abonos a los intereses y, de ser el caso, al capital, como se expuso en el hecho sexto de la demanda; amén, de lo previsto en los arts. 1653, 1654 y 1655 del C. Civil, en armonía con los arts. 877, 881, 884 y 885 de la Codificación Mercantil y lo ordenado en el canon 56 de la Ley 1438 de 2011, que refiere a los pagos de prestadores de servicios de salud; frente a la novación la parte demandada ha querido disfrazar la aceptación que hizo la acreedora de admitir los pagos por parte del Departamento de Antioquia, debidos en razón de la prestación del servicio por parte de la actora; pero jamás existió una obligación del ente departamental ni de la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia para con TRANSVITAL S.A.S., toda vez, que ésta nunca aceptó un cambio de obligación, sino que lo aceptado fue un pago para evitar el tránsito de dinero de cuenta en cuenta a fin de ahorrar pago de impuestos y retenciones; amén, que esos dineros no comportaron una novación sino un abono a las obligaciones, primero a intereses y en último caso a capital; además, en el sistema de seguridad social son

muchas las normas que proponen a las EPS pagar sus obligaciones con la red prestadora de servicios de salud, endosando al pagador las deudas que tengan para con la red de servicios; tal como lo manda el parágrafo 4º del art. 237 del Decreto 1955 de 2019. Ahora, la novación corresponde a la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, que queda extinguida; siendo necesario para su validez que tanto la obligación primitiva como el contrato de novación, sean válidos, a lo menos naturalmente; lo que significa, que una novación no se produce en un simple endoso de un derecho que tiene a cobrar un dinero, y que hace el deudor a su acreedor para cumplir con las obligaciones pendientes. Por estas razones, solicita se confirme la sentencia de primer grado.

### **III. CONSIDERACIONES**

***Problemas jurídicos:*** El recurso de apelación de cara a la sentencia de primer grado plantea el siguiente problema jurídico que la Sala debe resolver: ¿los medios de defensa formulados por el extremo pasivo están llamados a prosperar?

***El caso concreto:*** La sentencia anticipada la regula el artículo 278 del C. General del Proceso; al efecto dispone: *“Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.*

*“Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el*

*incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias.*

*“En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:*

*“1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.*

*“2. Cuando no hubiera pruebas por practicar.*

*“3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa”.*

En el presente caso, advierte la Sala que resultaba imperativo el agotamiento del período probatorio, decretando y practicando las pruebas solicitadas por las partes y las que de oficio la judicatura considere necesarias para mejor proveer y poder adoptar una decisión de fondo conforme a derecho; tal como se pasa a exponer:

Como prueba de los medios de defensa propuestos por el extremo pasivo, se trajo los siguientes elementos de convicción:

1. Copia del *“acta de liquidación contrato de prestación de servicios de salud”*, suscrita tanto por el representante legal

de la demandante como de la demandada; contrato objeto de liquidación, que dio origen a las facturas objeto de recaudo, donde una vez revisada la ejecución de lo contratado se procede a realizar la liquidación, haciendo una relación de los valores adeudados y en el numeral quinto señala: *"De acuerdo con lo anterior Coosalud EPS le Adeuda a la ESE la suma de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCO valor que será (sic) pagado en un plazo máximo de seis meses contados a partir (sic) de la expedición de la presente acta"*; documento suscrito el 04 de mayo de 2018.

2. Copia de los documentos denominados *"Compensación de pagos"* expedidos por la ejecutada y que se pasan a relacionar:

a) Compensación de pagos ZV Nro. 200325164 del 15 de febrero de 2018, que da cuenta del pago a proveedores de capitación por \$30.000.000,00 y como créditos compensados por dicho pago refiere a los contenidos en las facturas No. 1373 y 1362; pago debidamente soportado en la constancia expedida por el Banco GNB Sudameris, el 26 de febrero de 2019.

b) Compensación de pagos ZV Nro. 200325322 del 30 de marzo de 2019, que da cuenta del pago a proveedores de capitación por \$20.000.000,00 y como créditos compensados con dicho pago refiere a los contenidos en las facturas No. 1351 y 1352; pago debidamente soportado en

la constancia expedida por el Banco GNB Sudameris, el 03 de abril de 2019.

c) Compensación de pagos ZV Nro. 200326122 del 30 de octubre de 2019, que da cuenta del pago a proveedores de capitación por \$134.080.705,00 y como créditos compensados por dicho pago refiere a los contenidos en las facturas No. 1361, 1360, 1359, 1358, 1356, 1354, 1355 y 1353.

D) Compensación de pagos ZV Nro. 200325999 del 05 de junio de 2019, que da cuenta del pago a proveedores de capitación por \$30.000.000,00 y como créditos compensados con dicho pago refiere a los contenidos en las facturas No. 1357, 1352 y 1353; pago debidamente soportado en la constancia expedida por el Banco GNB Sudameris, el 31 de mayo de 2019.

Ahora, si bien los documentos denominados "*Compensación de pagos*" fueron expedidos directamente por la ejecutada y no fueron corroborados por otros medios probatorios en cuanto a los créditos que fueron compensados, los mismos no fueron desconocidos ni tachados de falso por la parte actora; además, como lo advirtió el Juzgado de primer grado, en el hecho sexto de la demanda se aceptan esos pagos hasta por \$80.000.000,00; pero se dejó de lado el documento referente a la compensación de pagos ZV Nro. 200326122 del 30 de octubre de 2019, que da cuenta del pago a proveedores de capitación por \$134.080.705,00 y como

créditos compensados con ese pago refiere a las facturas No. 1361, 1360, 1359, 1358, 1356, 1354, 1355 y 1353. En torno a las dudas que surgen sobre el mismo y su contenido, para esclarecerlas se tenía que decretar las prueba solicitadas por los litigantes y las que de oficio estimare pertinente el Juzgado, como interrogatorio a las partes, exhibición de documentos, entre otras; mírese que en el acta de liquidación del contrato se precisó como monto a cancelar por el total de las facturas \$214.080.705,00, que conforme a la demanda corresponde al monto del capital adeudado y contenido en los cartulares objeto de recaudo; y los pagos referenciados en la compensación de pagos por \$30.000.000,00, \$20.000.000,00, \$30.000.000,00 y \$134.080.705,00, ascienden exactamente al capital adeudado, que es la suma reconocida en el acta de conciliación (\$214.080.705,00); es más, el hecho sexto de la demanda afirma que con la demandada ha realizado distintos acuerdos de pago, sin especificar en que han consistido y, a pesar de que solo se informa del pago de \$80.000.000,00, no se dijo nada sobre el pago de los \$134.080.705,00 de que da cuenta el reseñado documento de compensación de pagos, ni tampoco indicó nada al descorrer el traslado de las excepciones propuestas; siendo necesario proceder a decretar y practicar las pruebas pertinentes para esclarecer tales circunstancias y entrar a determinar si los pagos realmente se realizaron y, en caso positivo, si corresponden a la cancelación de la obligación según los acuerdos celebrados por las partes, o si se trata de pagos parciales y cómo se deben imputar.

Es más, si conforme con el acta de liquidación de contrato, se acordó el pago de \$214.080.705,00, en un término de seis (6) meses, contados a partir del 04 de mayo de 2018, esto es, hasta el 04 de noviembre de 2018; no se auscultó el por qué dichos pagos se realizaron por fuera del referido término, y si lo pactado en el acta de liquidación del contrato sufrió alguna alteración, modificación o cambio; pues llama poderosamente la atención del Tribunal que la demanda se presentó el 10 de octubre de 2019 y con posterioridad, el 15 de octubre de 2019, conforme con la documentación aportada como anexo del recurso de apelación, las partes celebraron el denominado "*Contrato No. 005B de 2019 de cesión de derechos de crédito suscrito entre Coosalud EPS S.A. y JH SERVICES LTDA*"; donde aparece consignado:

*"PRIMERO OBJETO DE CONTRATO. Por medio del presente Contrato de Cesión de Derechos de Crédito EL CEDENTE transfiere al CESIONARIO, la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L (\$134.063.673).*

*"SEGUNDO: EXISTENCIA DEL CRÉDITO. EL CEDENTE garantiza que el derecho objeto de la cesión existe y surgió como resultado de la prestación de servicios de salud a los afiliados de COOSALUD EPS S.A. previo trámite de auditoria.*

*"TERCERO: AUTORIZACIÓN. EL CESIONARIO queda autorizado para solicitar a la SECRETARÍA SECCIONAL DE*

*SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA el pago objeto de la cesión, quien pagará conforme su disponibilidad presupuestal.*

*“CUARTO: VALOR. EL CEDENTE transfiere al CESIONARIO, hasta la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L (\$134.063.673), del valor que pague la SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA al CEDENTE, por concepto de recobros avalados. Esta suma constituye la cuantía total de la presente Cesión de Derechos de Crédito. El valor anteriormente mencionado se encuentra reconocido por la SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA a COOSALUD EPS S.A, conforme al contrato de transacción protocolizado entre las partes.*

*“... SÉPTIMO: OBLIGACIONES DEL CESIONARIO: Mediante el presente contrato de cesión de manera libre, expresa y espontánea manifiesta que: A) Reintegrará de manera inmediata a COOSALUD EPS S.A. el monto de un pago identificado como doble, como resultante de proceso permanente, continuo y acumulativo de los procesos de conciliación de cuentas. B) Asentará el pago de manera inmediata a su confirmación, a las facturas que notifique el CEDENTE. C) Registrará el pago contablemente en sus estados financieros con el fin de actualizar su información contable y lo concerniente al reporte de la Circular 030 en el corte que aplique y así garantizar que las facturas*

*afectadas con este pago no sean exigidas en instancias judiciales o extrajudiciales”.*

Además, se allegó copia del resumen de registros expedidos por el Banco Popular, donde consta como fecha efectiva del pago de \$134.063.673,00, el 31 de octubre de 2019 y como receptor la sociedad demandante JH SERVICES SAS; cancelación de la que da cuenta, como viene de indicarse, el documento denominado compensación de pagos ZV Nro. 200326122 del 30 de octubre de 2019 y del que la parte actora no informó al Juzgado de conocimiento.

Se puntualiza que en este caso, para resolver el litigio era imprescindible para el Juzgado de conocimiento, dar lugar al debate probatorio, decretando y practicando las pruebas solicitadas por las partes y las que a bien tuviera en forma oficiosa para mejor proveer; puesto que al momento de adoptar la decisión objeto de alzada, no existía claridad fáctica suficiente sobre los supuestos traídos a consideración por los justiciables, en aras de proferir una decisión en derecho y conforme al escrutinio de las pruebas oportunamente solicitadas, decretadas y practicadas.

Frente a este tópico la Jurisprudencia patria ha ordenado:

*“4. El ad quem incurrió en la vía de hecho endilgada porque no estudió el pagaré presentado como base del coercitivo a la luz de las anteriores disquisiciones, así como tampoco se pronunció suficientemente en cuanto a la excepción denominada “cobro de lo no debido”,*

*desconociendo que el juez ejecutivo, es ante todo, y sobre todo, el juez del título fundamento del compulsivo.*

*“Es necesario precisar que la alegación de la tutelante al contestar el libelo, concerniente a haber suscrito el título objeto del litigio para ser contratada en la sociedad ejecutante, debió generar en los juzgadores acusados una actividad diligente a fin de averiguar la veracidad de esa situación, máxime si la demandante de la ejecución no controvertió esa circunstancia e, incluso, estuvo de acuerdo con las pruebas ordenadas, relativas a la “exhibición de documentos contables” y peritaje, para determinar el monto del aparente “faltante” a cargo de la gestora como trabajadora, lo cual motivó su despido y la posterior denuncia penal probada en el decurso.*

*“Si el instrumento allegado hubiese gozado de total claridad expresividad y exigibilidad, no habría existido razón para acudir a elementos probatorios como los descritos a fin de comprobar el monto supuestamente adeudado, pues la demandada, aquí actora, no reportó el pago de ningún monto, sino la inconsistencia del endilgado “apoderamiento” de sumas de dinero en el ejercicio de su actividad laboral” (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia STC3298-2019, del 14 de marzo de 2019, radicado No. 25000-22-13-000-2019-00018-01, M.P. Dr. Luis Armando Tolosa Villabona).*

Así las cosas, como era imprescindible el decreto de pruebas para esclarecer la controversia planteada, no se

cumplía con los requisitos previstos en el art. 278 del C. General del Proceso para dictar sentencia anticipada, lo que permite colegir que la proferida fue prematura y, que precisamente, explica los vacíos y dudas planteadas, que ameritaban el agotamiento de todas las etapas del proceso y que se vieron truncadas como se ha venido precisando.

**Conclusión:** Consecuente con lo anterior, se impone la revocatoria de la sentencia de primer grado.

Como los litigantes no dieron lugar a la sentencia anticipada para poner fin al litigio, a pesar de que no estaban dados los presupuestos para proferirla y como el proceso debe continuar con su trámite hasta culminar legalmente, para evitar una doble condena y pago en costas, no hay lugar a imponer condena al pago de costas en esta oportunidad.

#### **IV. RESOLUCIÓN**

A mérito de lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

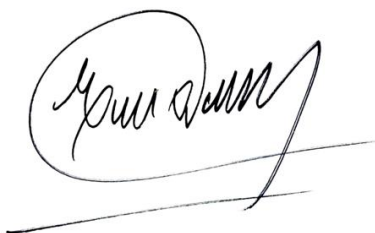
#### **F A L L A**

- 1.** Por lo dicho en la parte motiva se **REVOCA** la sentencia de fecha y procedencia indicadas.
- 2.** Sin costas.

**3.** Devuélvase el expediente al lugar de origen.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE**

**Los Magistrados**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'L' and 'G' that are interconnected, with a horizontal line extending from the end of the signature.

**LUIS ENRIQUE GIL MARÍN**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, overlapping loops and a final vertical stroke.

**MARTHA CECILIA LEMA VILLADA**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'R' and 'L' that are interconnected, with a horizontal line extending from the end of the signature.

**RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ**